

EENCUENTRO REGIONAL PARA LA PAZ En Catatumbo reclaman mesa con todas las guerrillas

VERDADABIERTA.COM Publicado el Lunes, 01 Diciembre 2014

Los pobladores creen que no cesara la violencia hasta que no se incluyan en los diálogos al Eln y al Epl y se ataquen las economías ilegales. La polarización del conflicto ha permeado a las organizaciones sociales.



Panel del Encuentro Regional de Paz en Tibú. De izquierda a derecha, Ediver Suárez, representante del Cisca; Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos Declarados ilícitos y de Indepaz; Diego Pérez de la de la Corporación Pensamiento y Acción Social; Sergio Chingay, líder del del resguardo Motilón Barí y Omar Alberto Cubillo, obispo de Tibú.

“Si no se ataca de raíz el narcotráfico y a los carteles de la gasolina, donde no solo están metidos las Farc, sino muchos más grupos, es muy difícil que acá nos sentemos todos a hablar de la paz que queremos”, dijo a VerdadAbierta.com un campesino que ha vivido por más de 50 años en La Gabarra, el corregimiento más grande del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Campesinos como él, además de líderes de víctimas, jóvenes, indígenas y representantes de la iglesia católica, asistieron al décimo Encuentro Regional para la Paz que tuvo lugar en Tibú para enterarse de cómo van acuerdos alcanzados hasta el momento en La Habana en desarrollo de las conversaciones que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc y de cuál podría ser la mejor manera de aplicarlos en la región.

Estos encuentros son promovidos por Redprodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Iniciativas por la Paz desde la Base, apoyados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Realizar un conversatorio de este tema en Tibú no es tarea fácil. Allí se sienten, a diario, las tensiones que implican dialogar en medio de la guerra. Reflejo de ello ocurrió un día antes del encuentro: las autoridades desactivaron un carro bomba instalado por el Frente 33 de las Farc en la carretera de que de Cúcuta conduce a esta población y en sus calles corría el rumor de un posible paro armado que, finalmente, no sucedió.

“Eso atemoriza a la gente y por eso la mayoría prefieren no participar abiertamente en esos espacios. La desconfianza es muy grande y muchos optan por encerrarse en sus casas”, le contó a VerdadAbierta.com un líder de víctimas de Tibú.

En efecto, de acuerdo con la percepción de quienes organizan estos Encuentros Regionales para la Paz, de los diez que se han realizado este año el de Tibú ha sido el menos concurrido.

En el Catatumbo, una región que agrupa 11 municipios de Norte de Santander, más de seis grupos armados ilegales se reparten los negocios del narcotráfico, la gasolina y el contrabando de diferentes mercancías. El Frente 33 de las Farc, el grupo guerrillero más fuerte en la zona, hace presencia en El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí. Cerca de la frontera está el Frente Camilo Torres del Eln. En El Tarra y en la parte alta de la Gabarra se ubica la guerrilla del Epl.

Además, los tibuyanos han escuchado recientemente de un nuevo grupo que se autodenomina ‘los Megas’ y que algunos llaman los ‘mega-paracos’. El nombre hace alusión a quien se cree es su jefe, Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, jefe del Epl. Al parecer, estos hombres hacen parte del círculo de seguridad más cercano del narcotraficante.

A ello se suma que, después de la desmovilización en 2005 del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aparecieron bandas criminales como ‘Los Rastrojos’, que se ubican en Zulia y parte de Tibú; las ‘Águilas Negras’ en Puerto Santander; y recientemente, las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘los Urabeños’.

La situación más crítica de la región se presenta en Villa del Rosario, donde estas tres bandas se disputan el control de diversos negocios ilegales cuyo tránsito desde y hacia Colombia se facilita por ser zona fronteriza.

A varios tibuyanos consultados por VerdadAbierta.com les preocupa que una eventual salida de las Farc del conflicto armado solo signifique una reubicación de los grupos armados ilegales que ya están en la región.

“Si solo las Farc se desmovilizan, ¿quién va a quedar en el poder? ¿Quién asegura que ‘Megateo’ no va a querer adueñarse de todo lo que queda libre?”, se preguntó uno de los asistentes al Encuentro.

Bajo ese panorama, las organizaciones sociales hicieron un llamado para que los demás grupos subversivos que están en el Catatumbo sean incluidos en los diálogos de paz.

“Nosotros respaldamos el proceso de La Habana, pero pedimos que se tengan en cuenta las dos insurgencias. No podemos desconocer la presencia histórica del Eln y del Epl en el Catatumbo”, aseguró a VerdadAbierta.com, Ediver Suárez, representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), una organización campesina creada en 2004.



Al evento asistieron líderes de víctimas, miembro de resguardos indígenas, organizaciones campesinas y colectivos de jóvenes. Foto: Redprodepaz.

En esto coincidió Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos Declarados ilícitos y de Indepaz, quien asistió como ponente al encuentro. “Si creen que una posible desmovilización de las Farc puede solucionar definitivamente el problema del narcotráfico, están equivocados. Deben estar involucrados los dos grupos subversivos y debe haber un compromiso serio de las autoridades para combatir a los grupos delincuenciales”.

Además, los tibuyanos temen que, tal como sucedió con los paramilitares, la desmovilización sea parcial, por eso les preocupa el futuro de los guerrilleros que se desmovilicen de las Farc si en el territorio siguen activos el Eln y el Epl.

Justamente, una de las preguntas que los asistentes les hicieron a los representantes del gobierno fue “¿Si no se desmovilizan todos los miembros del Frente 33, cómo se va a garantizar que eso guerrilleros no entren a formar parte del Epl?”.

Las deudas históricas

Los pobladores de Tibú tienen claro que el conflicto armado no es su único problema. Siempre han clamado ante los gobiernos regional y nacional por vías de acceso que faciliten al campesino la comercialización de sus productos. Un trayecto de algo más de 100 kilómetros, que es la distancia entre Cúcuta y Tibú, puede tardar hasta cinco horas

por un serpenteado camino de trocha, y de ahí a La Gabarra, el corregimiento más grande de este municipio, pueden ser otras tres horas.

También se quejan de los servicios de salud, de la escasez de profesionales que atienden los hospitales e incluso más recientemente, con la expedición de la Ley de Víctimas, los pocos psicólogos y terapeutas asignados a una zona donde la gran mayoría de la población ha sido víctima de la violencia.



Al evento asistieron líderes de víctimas, miembro de resguardos indígenas, organizaciones campesinas y colectivos de jóvenes. Foto: Redprodepaz

“No necesitamos de grandes eventos y estudios de ongs para saber lo que queremos, nosotros hace años tenemos claro qué es lo que necesitamos para salir adelante. Necesitamos carreteras, salud, educación y una verdadera presencia institucional”, dijo en el encuentro el periodista Ramón Sánchez, quien dirige la emisora Ecos del Catatumbo.

A los tibuyanos les preocupa que estas discusiones sean solo producto de la coyuntura por el proceso de paz que se adelanta por las Farc. Por eso otra de las preguntas que los asistentes hicieron a los representantes del Alto Comisionado para la Paz fue: ¿si los diálogos en La Habana no son exitosos, hay estrategias del gobierno para resolver los problemas de Catatumbo?

Propuestas sobre la mesa

“Los Catatumberos deben ser los protagonistas de su propia paz. A pesar de las diferencias que existan, todos deben estar representados y el modelo de desarrollo de esta región no puede ser impuesto por nadie”, aseguró Omar Alberto Cubillo, obispo de Tibú durante el encuentro.

El prelado agregó que en el caso del Catatumbo los interlocutores no van a ser los políticos tradicionales, sino que las organizaciones sociales tendrán un papel fundamental en la participación política. En las protestas campesinas ocurridas en 2013 se demostró la fuerza que tienen algunas de estas organizaciones.



Sergio Chingay, líder del del resguardo Motilón Barí.

Entre las organizaciones más fuertes está la de los indígenas del resguardo Motilón Barí, ubicado en el extremo norte del departamento, a orillas del río Catatumbo. Desde allí reclaman reconocimiento de su pueblo ancestral y total autonomía de sus territorios, algo que hasta ahora no ha sido respetado. A finales del año pasado se presentaron en sus tierras enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército.

Los Barí están dispuestos a sentarse a dialogar con los campesinos y su propuesta de Zona de Reserva Campesina (ZRC) que, en su proyecto inicial, incluye territorios que están siendo reclamados por el resguardo, pero piden una delimitación clara.

Los indígenas están de acuerdo con la sustitución de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito siempre y cuando se respeten las normas que brindan seguridad jurídica a sus territorios ancestrales. Además, solicitaron el acompañamiento de agencias de cooperación internacional para iniciar un proceso de reparación colectiva y el desminado de una parte de su resguardo.

“Queremos como pueblos indígenas participación directa en La Habana, se están negociando nuestras casas y dónde estamos incluidos”, dijo Sergio Chingay, líder de la comunidad.



Eugenio Guerrero, representante de Acamcat y Ediver Suárez, líder del Cisca.

En las organizaciones campesinas la mayoría de las propuestas están encaminadas al desarrollo rural y el uso de la tierra. La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que cuenta con más de siete mil miembros, defiende la creación de una Zona de Reserva Campesina de 326 mil hectáreas, que comprenden siete municipios y se estima que beneficiaría a más de 100 mil campesinos.

“Un país en paz debe involucrar no solo la agroindustria, sino el desarrollo de las economías campesinas y darle tierras a los campesinos es un primer paso”, dijo Eugenio Guerrero, representante de esta organización. Las ZRC son también un eje importante de la propuesta agraria de las Farc.

A su vez desde el Cisca proponen la creación de zonas agroalimentarias que blinden la producción de alimentos ante la avanzada de las grandes agroindustrias y la minería. “Es un figura que ayudaría a proteger el territorio de las explotaciones mineras y zonas palmeras que están destinadas a la producción de biodisel y propende por la seguridad alimentaria. Pero esta figura logra convivir con otras propuestas”, aseguró Ediver Suárez.

En resistencia

Sin embargo, no todos los campesinos se sienten identificados con estas organizaciones. Varios tibuyanos consultados por VerdadAbierta.com coincidieron en que estas dos organizaciones, que siempre son las invitadas a los eventos como las representantes de la sociedad civil, no tienen tantos seguidores como se pensó luego de la protesta campesina del año pasado.

“Mucha gente los respalda porque tienen miedo, porque viven en la zona donde está x o y grupo guerrillero y sienten que si no están con estas organizaciones corren peligro”, dijo

una persona que pidió la reserva de su nombre. Los pobladores consultados aseguraron que algunos de quienes se opusieron en su momento a las protestas campesinas fueron luego declarados objetivo militar de las Farc y algunos tuvieron que salir por un tiempo de la región.

Y es que en el ambiente de polarización que ha dejado la guerra, muchos campesinos prefieren no formar parte de organizaciones de las que piensan tienen cercanía a grupos guerrilleros.

“Acá lo que se dice es que cada una de esas organizaciones es apoyada por un grupo guerrillero y por eso es que muchos preferimos mantenernos al margen”, dijo otro tibuyano. El problema es que estos campesinos no tienen un tipo de organización que los represente.

Ante las denuncias y señalamientos los campesinos, el representante de Ascamcat aseguró que no conoce sobre ningún caso de estos en Tibú y agregó que la Asociación se opone a cualquier tipo de violencia de grupos armados.

El estigma de la palma

Quienes sí están organizados y están lejos de sentirse representados por Ascamcat y Cisca son los pequeños productores de palma. En Catatumbo existen 18 asociaciones de pequeños palmeros que agrupan a cerca de 1.500 familias que en promedio tienen 40 hectáreas de cultivo.

Los palmeros llegaron al Encuentro Regional de Paz reclamando un lugar en la mesa, pues creen que también tienen derecho a aportar sus ideas sobre el desarrollo rural. Además, aseguran que han tenido que vivir con el estigma de quienes los señalan de paramilitares por sembrar palma.

“Queremos que sepan quiénes somos. Nos perjudica mucho que nos tachen de paramilitares. Sentimos que el gobierno no se puede sentar solo con dos actores a planificar el desarrollo rural y los escenarios de posconflicto, porque nosotros también estamos acá”, expresó a VerdadAbierta.com uno de sus líderes, Parmenio Tinoco, representante de las 18 asociaciones de palmeros. Agregó que están dispuestos asumir su responsabilidad y tomar medidas frente al daño ambiental y la seguridad alimentaria.

En 2002 estas familias se unieron al Programa Presidencial de Sustitución de Cultivos Ilícitos, conocido como Plante, financiado por la agencia norteamericana Usaid. La mayoría de los cultivos se comenzaron a sembrar en Campo Dos, corregimiento de Tibú, y se ha ido extendiendo. “No todos tenían cultivos de coca, pero de alguna manera sí estaban relacionados, por ejemplo, algunos eran raspachines y el gobierno nos dio esta opción”, aseguró Tinoco.

Las asociaciones que tuvieron un aliado recibieron créditos del Banco Agrario y de Fiduagraria. Dicho aliado es en Oleoflores, que hace parte del grupo empresarial de Carlos Murgas, el empresario de la palma que fue ministro de agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana. Los productores están obligados a venderle el fruto a las empresas de Murgas durante 25 años.

“Nosotros estamos en contra del modelo de la palma que llegó de la mano de la violencia, pero no estamos en contra de los campesinos que ahora la cultivan, el campesino fue víctima que no tuvo más opciones después de que le fumigaron los cultivos”, aseguró el representante del Cisca.

Al finalizar el evento, los indígenas, las asociaciones campesinas y los palmeros se comprometieron a sentarse juntos a exponer sus ideas y construir proyectos más concretos frente a una posible desmovilización de las Farc.